

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

INE/CG586/2023

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022
DENUNCIANTE: JOSEFA SUAZO GARCÍA Y OTROS.
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022, INICIADO CON MOTIVO DE LA INTERPOSICIÓN DE SENDAS DENUNCIAS POR PARTE DE SIETE PERSONAS, EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR LA PRESUNTA VULNERACIÓN A SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN, ASÍ COMO EL SUPUESTO USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES PARA TAL FIN

Ciudad de México, 26 de octubre de dos mil veintitrés.

G L O S A R I O

<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el 14 de enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>PT o Denunciado</i>	Partido del Trabajo
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

IECM	Instituto Electoral de la Ciudad de México
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIFE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
Personas quejasas	Josefa Suazo García, Sandy Yudith Ortiz Flores, Ivonne Villafranco Romero, María Fernanda Parra Alcaraz, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE o Unidad Técnica	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

A N T E C E C E N T E S

1. DENUNCIAS. Mediante diversos oficios fueron remitidas a la *UTCE* de este Instituto las denuncias interpuestas por las personas quejasas, como se describe en el cuadro que se inserta enseguida:

No.	Quejoso	Junta que remitió	Fecha de presentación
1	Josefa Suazo García ¹	01 JDE, Guerrero	13 de enero de 2022
2	Sandy Yudith Ortiz Flores ²	05 JDE, Nuevo León	12 de enero de 2022
3	Ivonne Villafranco Romero ³	18 JDE, México	18 de enero de 2022
4	María Fernanda Parra Alcaraz ⁴	11 JDE, Michoacán	13 de enero de 2022
5	Ma. Gregoria Hernández López ⁵	06 JDE, San Luis Potosí	18 de enero de 2022
6	Abigail Bórquez Velderrain ⁶	04 JDE, Sonora	07 de enero de 2022

¹ Visible a páginas 5 a 8 del expediente

² Visible a páginas 12 a 15 del expediente

³ Visible a páginas 18 a 22 del expediente

⁴ Visible a páginas 25 a 29 del expediente

⁵ Visible a páginas 31 a 34 del expediente

⁶ Visible a páginas 42 a 44 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

No.	Quejoso	Junta que remitió	Fecha de presentación
7	Francisco Javier Cadena Morales ⁷		

2. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós⁸, la *UTCE* tuvo por recibidas las quejas mencionadas en la tabla que antecede, ordenó la integración del expediente **UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022** y determinó que el asunto debía tramitarse por la vía ordinaria.

Por otro lado, con el propósito de allegarse de elementos para esclarecer los hechos denunciados, requirió a la DEPPP y al denunciado para que informaran si las personas quejasas fueron afiliadas a dicho instituto político, la fecha de afiliación respectiva y, en el caso del citado partido, la cédula de afiliación correspondiente. Del mismo modo, se ordenó la baja de las y los inconformes del padrón de militantes respectivo.

Dichas diligencias fueron desahogadas como se muestra a continuación:

Sujeto	Fecha de notificación	Respuesta
Denunciado	04 de marzo de 2022 ⁹	Oficio REP-PT-INE-SGU-121/2029, de 14 de marzo de 2022 ¹⁰ Manifestó que las personas quejasas sí fueron afiliadas al denunciado y que, con excepción de Ma Gregoria Hernández López, al momento de la notificación si se encontraban afiliadas al PT, ya que la persona señalada fue dada de baja desde enero del 2022. Además, en cumplimiento a lo requerido por la UTCE, las dio de baja.
DEPPP	04 de marzo de 2022 ¹¹ Sistema de Archivo Institucional (SAI)	Correo electrónico de 14 de marzo de 2022 ¹² Informó que las personas quejasas sí fueron afiliadas al partido político y precisó sus fechas de afiliación, captura, baja y cancelación en el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Político.

⁷ Visible a páginas 46 a 50 del expediente

⁸ Visible a páginas 51 a 59 del expediente.

⁹ Visible a página 71 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 89 a 100 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 65 a 70 del expediente.

¹² Visible a páginas 105 a 106 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

Cabe señalar que, en dicho acuerdo, también se instruyó al denunciado para que diera de baja a los quejosos se su sitio de internet y de cualquier otra base de datos pública que administrara.

3. APORTACIÓN DE CÉDULAS DE AFILIACIÓN. Mediante oficio REP-PT-INE-SGU-129/2029, el partido político denunciado aportó al expediente el original de las cédulas¹³ de afiliación correspondiente a **Sandy Yudith Ortiz Flores** y **María Fernanda Parra Alcaraz**.

4. EMPLAZAMIENTO E INSPECCIÓN AL SITIO WEB DEL PT. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós¹⁴, la Unidad Técnica emplazó al procedimiento al denunciado, por la presunta indebida afiliación de las personas quejosas, haciendo para ello uso indebido de sus datos personales.

Del mismo modo, a fin de corroborar lo informado por la *DEPPP* y el denunciado, en el sentido de que las personas quejosas fueron dadas de baja del padrón de militantes del partido, se ordenó la certificación de su portal de internet, sin que se encontrase registro alguno de afiliación, como se hizo constar en el Acta Circunstanciada correspondiente¹⁵, en la que se asentó que no se encontró registro alguno de éste en dicho sitio web.

Sujeto notificado	Notificación	Respuesta
PT	Oficio INE-UT/07920/22 de septiembre de 2022 ¹⁶	Oficio REP-PT-INE-SGU-287/2022 ¹⁷ Señaló que no fue indebida la afiliación de las personas quejosas, toda vez que su incorporación al padrón de militantes del PT se realizó de manera libre y voluntaria, utilizando sus datos personales para tal efecto, tal como se justificó con el original de las cédulas de afiliación de Sandy Yudith Ortiz Flores.

5. ALEGATOS Y VISTA. Mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés¹⁸, la Unidad Técnica puso a la vista de las partes el expediente citado al rubro, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la legal

¹³ Visible a páginas 115 a 119 del expediente

¹⁴ Visible a páginas 154 a 163 del expediente

¹⁵ Visible a páginas 164 a 168 del expediente

¹⁶ Visible a página 169 del expediente

¹⁷ Visible a página 176 del expediente

¹⁸ Visible a páginas 177 a 181 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

notificación de dicho proveído, manifestaran en vía de alegatos lo que a su derecho conviniera.

De la misma forma, se ordenó dar vista a Sandy Yudith Ortiz Flores y María Fernanda Parra Alcaraz con copia simple del original de las cédulas de afiliación aportadas por el denunciado, a fin de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Tal proveído se notificó de la siguiente manera

Dicho acuerdo se notificó de la siguiente forma:

No.	Sujeto notificado	Notificación	Respuesta
1.	PT	Oficio INE-UT/03437/2023 10 de mayo de 2023 ¹⁹	Oficio REP-PT-INE-SGU-096/2023 ²⁰ de 17 de mayo de 2023. ²¹ Reitero las manifestaciones vertidas al contestar el emplazamiento
2.	Josefa Suazo García	19 de mayo de 2023 ²² Se notificó a la quejosa	No formuló alegatos
3.	Sandy Yudith Ortiz Flores	25 de mayo de 2023 ²³ Se notificó a persona autorizada	No formuló alegatos ni objeto la cédula de afiliación
4.	Ivonne Villafranco Romero	19 de mayo de 2023 ²⁴ Se notificó a la quejosa	No formuló alegatos
5.	María Fernanda Parra Alcaraz	18 de mayo de 2023 ²⁵ Se notificó a la quejosa	No formuló alegatos ni objeto la cédula de afiliación
6.	Ma. Gregoria Hernández López	30 de mayo de 2023 ²⁶ Se notificó por estrados	No formuló alegatos
7.	Abigail Bórquez Velderrain	19 de mayo de 2023 ²⁷ Se notificó por estrados ya que fue el domicilio que la quejosa señaló	No formuló alegatos
8.	Francisco Javier Cadena Morales	19 de mayo de 2023 ²⁸ Se notificó por estrados ya que fue el domicilio que la quejosa señaló	No formuló alegatos

¹⁹ Visible a página 191 del expediente

²⁰ Visible a páginas 195 a 196 del expediente

²¹ Visible a página 388 y siguientes del expediente

²² Visible a página 206 del expediente

²³ Visible a página 224 del expediente

²⁴ Visible a página 209 del expediente

²⁵ Visible a páginas a 218 a 219 del expediente

²⁶ Visible a páginas 260 a 265 del expediente

²⁷ Visible a páginas 234 a 239 del expediente

²⁸ Visible a páginas 245 a 248 del expediente

6. VERIFICACIÓN DE ESTATUS REGISTRAL. El cuatro de octubre de dos mil veintitrés, la *UTCE* realizó una verificación al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos y corroboró que las y los inconformes fueron dado de baja del padrón de militantes del PT, sin que hubiese sido reincorporado al mismo.

7. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución **correspondiente**, para que fuera sometido a la consideración de las integrantes de la *Comisión de Quejas*.

8. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. En su Quincuagésima Primera Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el veinte de octubre de dos mil veintitrés, la *Comisión de Quejas*, analizó y aprobó el presente proyecto, por **UNANIMIDAD** de votos de sus integrantes y ordenó su remisión a este *Consejo General* para su aprobación definitiva

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y), de la *LGPP*, con motivo de la probable transgresión al derecho de libre de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del denunciado, en perjuicio de las personas quejasas.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones

denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al PT, derivado, esencialmente, por la vulneración al derecho de libertad afiliación y la utilización indebida de datos personales de las personas quejasas.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²⁹ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos a los partidos políticos.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

1. Materia del procedimiento

Determinar si el denunciado conculcó o no el derecho de libre afiliación de las personas quejasas, en su vertiente positiva —indebida afiliación—, haciendo para ello, uso indebido de sus datos personales.

2. Marco Normativo

A) Constitución, leyes y acuerdos

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.³⁰

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, Base I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un

²⁹

Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

³⁰ Véase Tesis de Jurisprudencia 25/2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, Bases I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.³¹

Así las cosas, el *Tribunal Electoral*, en la Tesis de Jurisprudencia 24/2022, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES***.³² ha establecido, el contenido y alcances del Derecho de afiliación, de los que, en esencia, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral, además de la normativa estatutaria de cada partido político, en tanto una de las obligaciones que deben cumplir, en términos del artículo 25, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, estriba en *cumplir sus normas de afiliación*.

Por otro lado, la *Sala Superior*, a través de diversas sentencias³³ sostuvo que correspondía a los partidos políticos el probar que una persona expresó su voluntad de afiliarse, a través de la constancia de inscripción respectiva, es decir, el documento que contenía la expresión manifiesta de pertenecer a un partido político; criterio que, a la postre, dio origen a la tesis de jurisprudencia **3/2019**, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO***.

Por otro lado, la *LGPP* establece, entre otros supuestos, las obligaciones de los partidos políticos de registrar a su militancia; en efecto, en los artículos 29 y 30, de dicho ordenamiento, se prevé el deber de los institutos políticos de llevar a cabo

³¹ Véase Tesis de Jurisprudencia 25/2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

³² Consultable en: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

³³ Véase SUP-RAP-1107/2017, SUP-RAP-614/2017 y SUP-RAP-139/2018

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

este registro; así como del deber de garantizar la protección de los datos personales de sus agremiados.³⁴

En este tenor, el *INE* emitió los “Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro y su publicidad, así como para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral”.³⁵

En tal documento se estableció el deber de los institutos políticos nacionales de capturar de manera permanente los registros de sus militantes en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados, además de que la información ahí reportada debería coincidir con la solicitud de afiliación; debiéndose asentar datos como nombre de la persona, clave de elector, sexo, la entidad y la fecha de registro.³⁶

Posteriormente el *INE* emitió el acuerdo INE/CG33/2019, en el que, de manera excepcional, permitió que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, implementándose el “procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados a los Partidos Políticos Nacionales”, a través del cual los partidos políticos estaban obligados a revisar y depurar su padrón de militantes, al verificar que contaran con las cédulas de afiliación o, en su caso, debían darlos de baja del registro.³⁷

Sobre esto último, debe señalarse que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019, **el plazo para llevar al cabo las actividades del procedimiento de revisión, actualización y sistematización** de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, **sería el comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte.**

No obstante, **el procedimiento** de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales **fue dividido por etapas y fechas de inicio y fin**, conforme a lo siguiente:

³⁴ Véase numeral 28 (visible en la página 9) de la sentencia dictada por la *Sala Superior* en el expediente SUP-RAP-264/2022, consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2022/RAP/264/SUP_2022_RAP_264-1175193.pdf

³⁵ Ibid. numeral 29

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid. numerales 31 y 32

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

ETAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	
			Inicio	Fin
AVISO DE ACTUALIZACIÓN	Publicitar actualización de padrones	PPN	01/02/2019	31/01/2020
	Publicar leyenda "EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN"	INE	01/02/2019	31/01/2020
	Informe conclusión de etapa	INE	01/02/2020	28/02/2020
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN	Baja definitiva de las personas que interpusieron queja por indebida afiliación previo a la aprobación del Acuerdo	PPN	01/02/2019	31/03/2019
	Baja definitiva de registros por indebida afiliación presentada posterior a la aprobación del Acuerdo	PPN	10 días hábiles	
	Identificación de registros con documentación soporte de afiliación	PPN	01/02/2019	31/07/2019
	Publicación de los registros en reserva	PPN	01/02/2019	31/07/2019
	Notificación al INE de registros en reserva	PPN	5 días hábiles de cada mes Mar-Ago	
	Actualizar padrones de los PPN con registros en reserva	INE	5 días hábiles posterior a la notificación	
	Informe conclusión de etapa	INE	01/08/2019	31/08/2019
	RATIFICACIÓN	Aprobar mecanismos para ratificación y refrendo de militancia, en caso de haberlo	PPN	01/02/2019
Informar a la militancia proceso de ratificación y refrendo		PPN	01/02/2019	31/12/2019
Recabar documentación que acredite la afiliación		PPN	01/02/2019	31/12/2019
Informar registros que ratificaron o refrendaron su militancia		PPN	01/03/2019	31/12/2019
Actualizar padrones de los PPN en función de los registros refrendados		INE	01/03/2019	31/12/2019

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

ETAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	
			Inicio	Fin
	Cancelar registros en reserva de los que no se obtenga documentación soporte	PPN	01/03/2019	31/12/2019
	Informe conclusión de etapa	INE	02/01/2020	31/01/2020
CONSOLIDACIÓN	Ajustes finales al padrón de afiliadas y afiliados	PPN	02/01/2020	31/01/2020
	Informar respecto de la cancelación de registros en reserva de los que no se obtuvo documentación soporte de afiliación	PPN	09/01/2020	31/01/2020
	Apercibir respecto de los registros en reserva	INE	31/01/2020	31/01/2020
	Informe final	INE	01/02/2020	29/02/2020

De lo anterior y conforme a lo establecido en el acuerdo **INE/CG33/2019**, se obtiene el procedimiento siguiente:

1. **REVISIÓN.** Del uno de febrero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve los partidos políticos llevaron a cabo la revisión de la documentación soporte de la totalidad de las y los afiliados a estos.³⁸
2. **RESERVA.** Del uno de febrero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, los partidos debían reservar los registros como militantes, de aquellas personas **respecto de las cuales no tuvieran cédula de afiliación** o documento que acredite la voluntad, aun cuando no se hubieren presentado quejas por indebida afiliación.³⁹

Esto es, el **treinta y uno de julio de dos mil diecinueve** venció el plazo para que los partidos reservaran los registros de afiliación con los que **a esa fecha contaban.**

3. **RATIFICACIÓN.** A más tardar al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, los partidos políticos realizaron el procedimiento de ratificación

³⁸ Considerando 12, numeral 2, con relación al numeral 2.2, del acuerdo INE/CG33/2019.

³⁹ Considerando 12, numeral 2, con relación al numeral 2.2, inciso b), del acuerdo INE/CG33/2019.

o refrendo de la militancia, respecto de todos aquellos registros clasificados como reservados dado que no cuentan con cédula de afiliación.⁴⁰

Esto es, si bien a más tardar al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, los partidos políticos podían recabar una cédula de afiliación que acredite la debida afiliación de sus militantes, lo cierto es que **dicho plazo solo resulta aplicable para aquellos registros reservados al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.**

Conforme a lo anterior, se obtiene la premisa siguiente:

- 4. REGISTROS POSTERIORES AL 31 DE JULIO DE 2019.** Al tratarse de registros que al treinta y uno de julio de dos mil veintidós, no se encontraban en los padrones de los partidos políticos, estos no fueron reservados, por tanto, se trata de **registros nuevos**⁴¹ que, para llevarlos a cabo, debieron contar a esa fecha con la respectiva cédula de afiliación.⁴²

Lo anterior, puede ilustrarse en la siguiente línea de tiempo:

⁴⁰ Considerando 12, numeral 2, con relación al numeral 3, del acuerdo INE/CG33/2019.

⁴¹ Considerando 13 del acuerdo INE/CG33/2019: **13. Las nuevas afiliaciones de las y los militantes de los PPN, así como los refrendos o ratificaciones deberán incluir elementos mínimos, a fin de que puedan demostrar fehacientemente la debida afiliación de la ciudadanía, a saber: nombre completo, clave de elector, fecha de afiliación, domicilio completo y la manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN, además deberán contener los requisitos que establezca la normatividad interna de cada PPN. Adicionalmente, el INE desarrollará una aplicación móvil que permita a los partidos políticos obtener nuevas afiliaciones, ratificaciones o refrendos, de su militancia. Lo anterior, automatizará el procedimiento de afiliación, ratificación o refrendo, además de que el INE resguardará un archivo digital de ello en un expediente electrónico; sin que esto exima al PPN de la obligación de conservar el documento (físico o digital) que acredite la debida afiliación, refrendo o ratificación en virtud de que los PPN son los sujetos obligados del cuidado y manejo de los datos que obran en sus padrones de afiliadas y afiliados. (...)**

⁴² Considerando 12, numeral 3, con relación al numeral 3, del acuerdo INE/CG33/2019: **De obtener la manifestación de voluntad de la persona ciudadana en el sentido de que sí estaba afiliada al partido político y ésta se manifieste por escrito o a través de la aplicación móvil, entonces deberá proceder la ratificación de la militancia con la fecha de afiliación asentada en el padrón —verificado por el Instituto en 2017 y actualizado de forma permanente por los partidos políticos— publicado en la página del INE con corte a la fecha de aprobación de este Acuerdo.**

LÍNEA DE TIEMPO PARA LA OBTENCIÓN DE FORMATO DE AFILIACIÓN



Consideraciones similares sostuvo este Consejo General en la resolución INE/CG470/2022, que resolvió el procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/IPP/JD11/MICH/42/2021, la cual fue confirmada por Sala Superior mediante sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, al resolver el SUP-RAP-264/2022.

Además, en el caso, los Estatutos de Partido del Trabajo, sus artículos 14 y 22, establecen los requisitos de ingreso de los afiliados a dicho partido, entre los cuales destacan que serán militantes las personas ciudadanas que acepten y suscriban los Documentos Básicos y las políticas específicas del partido, para lo cual, deberán presentar una solicitud de afiliación por escrito, de manera personal, individual, libre, pacífica y voluntaria, ante la Comisión Ejecutiva Municipal, Delegacional, Estatal, del Distrito Federal y Nacional en su caso.

En suma, de las normas antes referidas se obtiene, medularmente, lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos políticos.
- Al PT podrán afiliarse las y los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.

- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser mexicano y expresar **su voluntad de manera individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, haber tenido el carácter de adherente por al menos dos años y solicitar el cambio de estatus al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Los partidos políticos deberían cancelar aquellos registros de las personas de las que no contaran con la cédula de afiliación.

B) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones *si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer*

3. Pruebas y hechos acreditados

Como se ha mencionado, las personas quejasas denunciaron la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al haber sido incorporadas al padrón del PT sin su consentimiento, así como la presunta utilización indebida de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Establecido lo anterior, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la materia de controversia, en el siguiente cuadro se resumirá, la información derivada de la investigación implementada, así como las conclusiones que, para el caso, fueron advertidas:

No.	Persona quejosa	¿Se aportó cédula?	Fecha afiliación cédula	Fecha afiliación DEPPP	Fecha afiliación partido
1.	Josefa Suazo García	No	No aplica	11/09/2014	11/09/2014
2.	Sandy Yudith Ortiz Flores	Si	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014
3.	Ivonne Villafranco Romero	No	No aplica	28/11/2019	28/11/2019
4.	María Fernanda Parra Alcaraz	Si	Cédula 2020 Escrito de ratificación sin fecha	12/02/2020	10/02/2020
5.	Ma. Gregoria Hernández López	No	No aplica	13/03/2020	10/03/2020
6.	Abigail Bórquez Velderrain	No	No aplica	14/06/2008	14/06/2008
7.	Francisco Javier Cadena Morales	No	No aplica	26/11/2019	26/11/2019

Al respecto cabe decir que el partido denunciado aportó la cédula de afiliación física de Sandy Yudith Ortiz Flores y María Fernanda Parra Alcaraz, además de un formato de ratificación de afiliación de la última de las personas referidas, las cuales tienen el carácter de documental privada, por lo que únicamente harán prueba plena en cuanto a los hechos a los que se refiere cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, con fundamento en lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), y 462, párrafos 1 y 3, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción II; y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas.

Por otro lado, esta autoridad electoral recabó como pruebas el informe rendido por la DEPPP, en cuanto al estado registral de las y los quejosos como afiliados del partido denunciado, las cuales son pruebas documentales públicas con valor

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y 22, párrafo 1, fracción I, incisos a) y b); y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; no encontrarse objetadas en cuanto a su autenticidad y contenido conforme a las reglas previstas en el artículo 24 del reglamento antes citado; ni estar desvirtuadas por algún elemento agregado a los autos.

Así, de acuerdo con la información obtenida de las pruebas mencionadas y sistematizada en el cuadro inserto párrafos arriba, se pueden obtener las **conclusiones generales** siguientes:

1. No existe controversia en el sentido que las personas quejasas, **fueron registradas como militantes del partido denunciado.**
2. Las fechas de afiliación manifestadas por el denunciado son congruentes con las que fueron informadas por la *DEPPP*;
3. Las fechas de afiliación que figuran en la cédula de afiliación física de Sandy Yudith Ortiz Flores son coincidentes con la información derivada del Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos;
4. Aun cuando las fechas de afiliación que figuran en la cédula de afiliación física de María Fernanda Parra Alcaraz, únicamente son coincidentes con la información derivada del Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, en el año en que se obtuvo el consentimiento, la falta de ese requisito de forma no es óbice para restarle eficacia demostrativa respecto de la libre y voluntaria afiliación.
5. En igual sentido, la falta de fecha del escrito de ratificación de la afiliación de María Fernanda Parra Alcaraz, no impide que se tenga por justificada su afiliación, como se expondrá en lo subsecuente.
6. El partido político no aportó la cédula de afiliación, ni algún otro elemento de prueba, que revelara el carácter voluntario de la militancia de Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales, no obstante las diversas oportunidades procesales para ello.

Acreditado lo anterior, en el siguiente apartado se procederá a detallar la información asentada en cada una de las conclusiones señaladas, así como, a determinar si para su inclusión en el padrón de militantes del *PT*, medió o no su consentimiento y, por ende, si el uso de sus datos personales para tal fin fue conforme a derecho, dado que es la materia de fondo del presente asunto.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, las personas inconformes adujeron en sus respectivos cursos haber sido incorporadas al padrón de militantes del partido denunciado sin haberlo consentido, además de que dicho instituto político presuntamente hizo uso de sus datos personales para conseguir el objetivo mencionado.

Por su parte, el instituto político denunciado señaló en sus distintas intervenciones procesales, que la afiliación de las personas quejasas fue voluntaria y libre; sin embargo, sólo exhibió las cédulas de afiliación de **dos** personas quejasas, ya que adujo no contar con las restantes debido a que no las había podido localizar.

Al respecto, es preciso destacar que, por regla general, los partidos políticos tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que sus afiliadas y afiliados acudieron a solicitar su incorporación como militantes y que las mismas fueron libres y voluntarias, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos, así como el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Lo anterior es así, porque los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder; y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario, lo que se analiza en los apartados siguientes.

Afiliaciones legales (dos personas quejas)

Como se dijo al relatar los antecedentes del presente asunto, el *PT* afirmó que la militancia de las personas quejas, estuvo precedida de su voluntad libre e individual, cumpliendo lo establecido en la Constitución, en las normas legales derivadas de ella y en sus ordenamientos internos, sin hacer uso indebido de sus datos personales; sin embargo, sólo aportó para demostrar sus afirmaciones la cédula de afiliación de Sandy Yudith Ortiz Flores y María Fernanda Parra Alcaraz.

Al respecto, cabe resaltar que, en su oportunidad, la Unidad Técnica dio vista a las y los citados inconformes con copia simple del original de la cédula de afiliación respectiva, concediéndole un plazo perentorio para manifestar lo que a su derecho conviniera, respecto a dicho documento **sin que hubieran objetado en modo alguno el valor y alcance probatorio de dichas documentales.**

En el mismo sentido, cabe recordar que, como se puso de manifiesto en los antecedentes de la resolución que nos ocupa, la Unidad Técnica puso los autos a la vista de las partes, para que formularan alegatos, **sin que en esta nueva oportunidad procesal, comparecieran a formular conclusiones tendentes a restar eficacia probatoria a las cédulas aportadas por el denunciado.**

En este sentido, la falta de objeción en cuanto a su autenticidad, contenido y alcances probatorios de las documentales aportada por el denunciado trae como consecuencia que su valor probatorio se eficaz para demostrar la libre y voluntaria afiliación de Sandy Yudith Ortiz Flores y María Fernanda Parra Alcaraz, ya que al concatenarse con el acervo probatorio restante pone de relieve la legalidad de las afiliaciones cuestionadas.

En suma, para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como sucede en el presente caso, no solo de objetar tales medios de prueba, sino que debe hacerlo en términos del artículo 24 del citado Reglamento.

Por último, no pasa inadvertido que si bien la cédula de afiliación de María Fernanda Parra Alcaraz, aportada por el denunciado, únicamente contiene el año (2020) en que se obtuvo su consentimiento, sin referir día y mes, ello no resulta óbice para otorgarle eficacia probatoria para demostrar la libre y voluntaria incorporación de la citada quejosa, porque además de que, en cuanto al año, si resulta coincidente con

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

la fecha de la afiliación proporcionada por la DEPPP (doce de febrero de dos mil veinte), concatenada con los elementos de prueba restantes ponen de relieve que si se obtuvo su consentimiento previo para afiliarla al padrón de militantes del PT, incluso mediante escrito ratificó sus afiliación.

En efecto, la fecha de afiliación solo constituye un requisito formal de la cédula de afiliación estudiada, cuya falta no pone en duda su existencia y validez para demostrar la manifestación de la voluntad ahí contenida, máxime que se encuentra robustecido con el caudal probatorio restante, además de que tampoco fue objetada por la María Fernanda Parra Alcaraz, de modo que, a juicio de esta autoridad electoral, la cédula si justifica la legal afiliación de María Fernanda Parra Alcaraz.

Por todo lo antes razonado, atento que el *PT* aportó prueba idónea y suficiente para acreditar que la afiliación de las personas referidas en este apartado fue voluntaria, sin que éstas cuestionaran su autenticidad y contenido a pesar de las oportunidades que tuvieron en distintos estadios procesales, se debe concluir que las afiliaciones bajo estudio se realizaron conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables y, por tanto, es **INEXISTENTE** la infracción denunciada.

Afiliaciones ilegales (cinco personas quejas)

De la manera que fue relatado a lo largo de los antecedentes de la presente resolución, el *PT* no aportó medio de convicción alguno que revelara el carácter voluntario de las afiliaciones de Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales, de manera que, aun cuando aseveró que dichas afiliaciones fueron libres y voluntarias, lo cierto es que no demostró su aserto con elemento de prueba alguno, faltando a la carga de probar los hechos en los que basó su defensa.

En efecto, la simple manifestación del denunciado en el sentido que no tuvo la posibilidad de exhibir el soporte documental correspondiente a las cinco personas quejas referidas, ante requerimiento expreso de la *Unidad Técnica*, en modo alguno puede considerarse como causa de justificación para que ese elemento probatorio no fuera presentado a esta autoridad, puesto que se trata de afirmaciones no probadas.

Posteriormente, al momento que dio respuesta al emplazamiento de ley, tampoco aportó las documentales atinentes, no obstante, tiene la carga de verificar, revisar y constatar fehacientemente que la persona, cuyo caso aquí se analiza, otorgó de

forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que se constara y probara ese hecho.

Por lo anterior, es válido concluir que el *PT* no demostró que la afiliación de las mencionadas personas quejasas se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento en el cual se hiciera constar que consintieron ser afiliados, no obstante que en términos de la información proporcionada por la *DEPPP* tal persona sí se encontraba afiliada a ese instituto político.

Por lo anterior, es válido considerar **EXISTENTE** la infracción bajo estudio, por cuanto hace a Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales, toda vez que el partido denunciado no cumplió con la carga de probar que la afiliaciones respectivas se solicitaron voluntariamente, de modo tal que **existe una vulneración al derecho de afiliación de las personas quejasas** y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, el mencionado partido político **utilizó sin su autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que proceda.

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Demostrada plenamente la existencia de la falta denunciada, así como la responsabilidad del *PT*, procede ahora determinar la sanción que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a que los elementos que se deben tomar en cuenta entre los que se encuentran la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<p>La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i>, el <i>COFIPE</i> y la <i>LGIPE</i>, en el momento de su comisión.</p>	<p>El <i>PT</i> cometió la infracción al incorporar a su padrón de afiliados a Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales, sin haber recabado su consentimiento, de manera que transgredió su derecho de libre afiliación, usando para el efecto mencionado los datos personales de las citadas quejas</p>	<p>Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i>; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 1, inciso a), del <i>COFIPE</i>; 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i>; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la <i>LGPP</i>.</p>

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las personas ciudadanas, de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Así, se acreditó que el *PT* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales, sin demostrar que, para ello medió la voluntad de las personas referidas de inscribirse a dicho padrón, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

En el caso a estudio existe singularidad de la falta, dado que, aun cuando se acreditó que el *PT* afilió a Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales sin que hubieran expresado su consentimiento; y que, para ello, usó sin autorización sus datos personales, lo cierto es que no existe una pluralidad de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

infracciones o de faltas administrativas, pues la segunda circunstancia mencionada es una condición para la comisión de la infracción, misma que consiste en incluir en su padrón de militantes a una persona, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse juntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) **Modo.** La falta que se analiza la cometió el PT cuando incorporó a su padrón de afiliados a Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales, sin contar con su consentimiento y haciendo uso indebido de sus datos personales, lo cual es contrario a lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 1, inciso a), del COFIPE; así como 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

a) **Tiempo y lugar.** La afiliación irregular aconteció como se indica en el cuadro siguiente:

No.	Persona quejosa	Fecha de afiliación	Lugar
1	Josefa Suazo García	11/09/2014	Guerrero
2	Ivonne Villafranco Romero	28/11/2019	México
3	Ma. Gregoria Hernández López	13/03/2020	San Luis Potosí
4	Abigail Bórquez Velderrain	14/06/2008	Sonora
5	Francisco Javier Cadena Morales	26/11/2019	Sonora

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PT*, en vulneración a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 44, párrafo 2; 341,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 1, inciso a), del COFIPE; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El denunciado es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9º, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El partido denunciado está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional, así como sus normas internas** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, incisos a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadana y ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 3, párrafo 2, y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

1. Las personas quejasas adujeron que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes del denunciado.
2. Quedó acreditado que Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco

Javier Cadena Morales fueron incluidos en el padrón de militantes del PT, conforme a lo informado por la *DEPPP*.

3. El partido político denunciado no demostró que la afiliación dichas personas se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios descritos en la presente resolución, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de ésta.
5. El partido denunciado no demostró que la afiliación de Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que su afiliación fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta pertinente precisar que la conducta desplegada por el *PT* se cometió al afiliar indebidamente a Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales, sin demostrar que expresaron su voluntad para ser incorporados en el padrón de militantes del denunciado, así como para usar sus datos personales con esa finalidad.

Lo anterior, pues —se insiste—, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si el quejoso otorgó o no su consentimiento expreso para ser afiliado, de modo que, a pesar de las oportunidades procesales que tuvo, el partido político no allegó al sumario la cédula de afiliación atinente ni algún otro medio de convicción que revelara el consentimiento del inconforme para ser registrado como militante del denunciado.

2. Individualización de la sanción.

Una vez asentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Conforme al artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

En este sentido, es un hecho notorio para este órgano colegiado la existencia de diversas resoluciones emitidas por el Consejo General, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado, la identificada con la clave INE/CG273/2018⁴³, a través de la cual, el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017, determinó la responsabilidad del hoy denunciado al actualizarse la indebida afiliación que fue analizada en dicho procedimiento, resolución que adquirió definitividad y firmeza, en tanto que no fue impugnada.

En esta medida se considera que existe reincidencia respecto a Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López y Francisco Javier Cadena Morales, cuyas afiliaciones sucedieron en el año dos mil diecinueve y dos mil veinte, es decir, después de que la resolución en que se sancionó por vez primera al PT, por conductas de igual naturaleza, adquirió definitividad y firmeza, a diferencia de Abigail Bórquez Velderrain y Josefa Suazo García, quienes fueron afiliadas en los años de dos mil ocho y dos mil catorce.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse como de una **gravedad ordinaria**, tomando en cuenta las circunstancias siguientes:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de las personas cuyo caso se analiza, pues el PT no demostró con la documentación idónea que mediara su voluntad de pertenecer a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es el derecho de las y los ciudadanos de afiliarse libremente a los partidos políticos, desafilarse de ellos o no pertenecer a ninguno;

⁴³ Consultable en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95595/CGord201803-28-rp-6-3.pdf>

- Los partidos políticos tienen la obligación de velar por el debido respeto del referido derecho fundamental, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen hacerlo.
- Para materializar la indebida afiliación de la persona quejosa, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para ser incorporada al padrón de afiliados del denunciado.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- Existe reincidencia por parte del partido denunciado sólo en tres casos de los cinco en que resultó existente la infracción.

Por lo anterior, como antes quedó dicho, se considera procedente calificar la como de **gravedad ordinaria**.

C) Sanción a imponer

En la mecánica para la individualización de la sanción, se debe partir de la premisa que, con la acreditación de la infracción, se debe imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIFE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda;

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras** cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, así como del criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLV/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al cuántum de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación como el que ha quedado demostrado a cargo del *PT*, justifican la imposición de una **MULTA**.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental de la ciudadanía a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Atento a ello, este *Consejo General* considera que **la actitud adoptada por el PT, al dar de baja a las personas quejasas no puede liberarlo de la responsabilidad en que incurrió**, y por el contrario, su actitud descuidada, al no haber procesado dicha cancelación dentro de los plazos previstos en el acuerdo INE/CG33/2019, cuya finalidad era lograr la confiabilidad de los padrones de los partidos políticos, en cuanto a que las personas que figurasen como sus militantes, hubieran sido incorporadas voluntariamente al padrón correspondiente, pues como consta en autos los dio de baja hasta el seis de enero de dos mil veintidós, en el caso de Ma. Gregoria Hernández López y, el cuatro de marzo del mismo año, en los casos restantes.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial (entendida formal o materialmente), a juicio de este órgano electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción, se justifica la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIFE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

excesivas, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico que se trata de la afiliación indebida de tres personas, que tal conducta se consideró de carácter doloso, que fue considerada de gravedad ordinaria, que el quejoso fue dado de baja con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte, así como las condiciones socio-económicas de infractor, esta autoridad considera proporcional, en el caso concreto, imponer al Partido del Trabajo una multa equivalente a **novecientos sesenta y tres días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, durante los años de dos mil ocho y dos mil catorce**, cuando sucedió la afiliación indebida de Abigail Bórquez Velderrain y Josefa Suazo García, respectivamente, debido a que, en su caso no existe reincidencia, mientras que, para los casos de Ivonne Villafranco Romero, Francisco Javier Cadena Morales y Ma. Gregoria Hernández López, toda vez que existe reincidencia, se considera proporcional imponer una multa de **un mil doscientas ochenta y cuatro unidades de medida y actualización, conforme al valor que tenía en dos mil diecinueve y dos mil veinte** cuando sucedieron los hechos ilegales.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Federal —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, de *salarios mínimos* (vigentes en la Ciudad de México) a Unidades de Medida y Actualización, con sustento en el criterio contenido en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE**

**CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022**

CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.⁴⁴

A fin de lo expresado, es necesario multiplicar la sanción que se consideró proporcional (963 días) por el valor del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México durante el ejercicio dos mil ocho⁴⁵ y dos mil catorce⁴⁶, el cual era de \$ 50.96 (cincuenta pesos 96/100 M.N) y \$67.29 (sesenta y siete pesos, 29/100 M.N.), respectivamente, valor que se invoca como un hecho notorio, con apego a lo previsto en el artículo 461 de la LGIPE, por encontrarse publicado en la página oficial de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a lo cual resulta orientadora la tesis relevante de rubro *HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.*⁴⁷

Así, con el objeto de expresar la multa señalada en Unidades de Medida y Actualización, al realizar las operaciones aritméticas correspondientes tenemos como resultado lo siguiente.

Quejosa	Fecha de afiliación	Salario mínimo a la fecha de afiliación	Sanción en salarios mínimos	Valor de la UMA 2023	Equivalencia en UMAS	Sanción por imponer
Abigail Bórquez Velderrain	14/06/2008	\$ 50.96	963	\$103.74	473.05	\$49, 074.48
Josefa Suazo García	11/09/2014	\$67.29	963	\$103.74	624.64	\$64, 800.27
Suma de multa						\$113, 874.75

⁴⁴ Consultable en <https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#TEXTO%2010/2018>

⁴⁵ Consultable en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104986/Tabla_de_salarios_minimos_vigentes_a_partir_de_01_enero_2008.pdf

⁴⁶ Consultable en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104991/Tabla_de_salarios_minimos_vigentes_a_partir_de_01_enero_2014.pdf

⁴⁷ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

Ahora bien, por cuanto se refiere a las afiliaciones indebidas de Ivonne Villafranco Romero, Francisco Javier Cadena Morales y Ma. Gregoria Hernández López, la cuales —como se indicó— sucedieron en el año dos mil diecinueve , respecto de las dos primeras personas y dos mil veinte respecto de la última, cuando ya estaba en vigor la unidad de medida y actualización que, al existir reincidencia se consideró proporcional imponer una multa equivalente a un mil doscientas ochenta y cuatro y que dicha medida, en el año dos mil diecinueve tenía un valor de \$ 84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.) y en el año dos mil veinte un valor de \$ 86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 M.N), lo procedente es multiplicar el un mil doscientas ochenta y cuatro unidades de medida y actualización, por el valor de la UMAS referidas para obtener la multa a imponer **por cada uno de los casos que se analizan**, tal como se muestra en la gráfica siguiente:

Nº	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA ⁴⁸	Sanción por imponer
1	Ivonne Villafranco Romero	1,284	28/11/2019	\$ 84.49	\$108, 485.16
2	Ma. Gregoria Hernández López	1,284	13/03/2020	\$ 86.88	\$111, 553.92
3	Francisco Javier Cadena Morales	1,284	26/11/2019	\$ 86.88	\$108, 485.16
Suma de multa					\$ 328, 524.24

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al PT constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

Cabe señalar que, respecto de esta última, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave **INE/CG208/2023**, confirmada a través del **SUP-RAP-71/2023**.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que aun cuando la infracción cometida por el PT causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no condujo a que el instituto político obtuviera

⁴⁸ Consultable en: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

algún monto como beneficio o lucro, ni que el quejoso sufriera un daño o perjuicio económico ocasionado por la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que, según lo informado por la *DEPPP*, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/02452/2023, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de dos mil veintitrés debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir por el partido político sería la siguiente:

SUJETO	Financiamiento mensual ordinario (A)	Deducción por multas y sanciones (B)	Importe neto de la ministración (A-B)
<i>PT</i>	\$ 33,799,357.00	\$ 1,987,886.03	\$ 31,749,668.71

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la suma de las multas impuestas al *PT* no es gravosa ni excesiva, en virtud de que su cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, representa el 1.39% (uno punto treinta y nueve por ciento) del total de la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, sin resultar excesiva ni ruinosa, ni afecta las operaciones ordinarias del partido, además de ser proporcional a la falta cometida y generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁴⁹, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

⁴⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIFE*, las cantidades objeto de las multas serán deducidas por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el *PT*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,⁵⁰ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Es **INEXISTENTE** la infracción atribuida al Partido del Trabajo, consistente en la afiliación indebida y uso no autorizado de datos personales, en lo que atañe a Sandy Yudith Ortiz Flores y María Fernanda Parra Alcaraz, en términos de lo razonado en el Considerando **SEGUNDO** de la presente determinación.

SEGUNDO. Es **EXISTENTE** la afiliación indebida de Josefa Suazo García, Ivonne Villafranco Romero, Ma. Gregoria Hernández López, Abigail Bórquez Velderrain y Francisco Javier Cadena Morales, en términos de lo razonado en el considerando **SEGUNDO**, de la presente resolución, por lo que se impone al Partido del Trabajo las multas que se detallan enseguida:

⁵⁰ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: "**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**"

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

Quejosa	Fecha de afiliación	Salario mínimo a la fecha de afiliación	Sanción en salarios mínimos	Valor de la UMA 2023	Equivalencia en UMAS	Sanción por imponer
Abigail Bórquez Velderrain	14/06/2008	\$ 50.96	963	\$103.74	473.05	\$49, 074.48
Josefa Suazo García	11/09/2014	\$67.29	963	\$103.74	624.64	\$64, 800.27
Suma de multa						\$113, 874.75

Nº	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA ⁵¹	Sanción por imponer
1	Ivonne Villafranco Romero	1,284	28/11/2019	\$ 84.49	\$108, 485.16
2	Ma. Gregoria Hernández López	1,284	13/03/2020	\$ 86.88	\$111, 553.92
3	Francisco Javier Cadena Morales	1,284	26/11/2019	\$ 86.88	\$108, 485.16
Suma de multa					\$ 328, 524.24

TERCERO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al Partido del Trabajo será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme.

NOTIFÍQUESE, personalmente a las personas quejosas; **en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral** al PT, por conducto de su representante propietario ante este Consejo General de este Instituto; y por estrados, a quienes les resulte de interés.

⁵¹ Consultable en: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JSG/JD01/GRO/19/2022

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 26 de octubre de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaña Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona.

Se aprobó en lo particular el criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaña Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, y un voto en contra del Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA
DEL CONSEJO GENERAL**

**LA ENCARGADA DEL DESPACHO
DE LA SECRETARÍA
DEL CONSEJO GENERAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI
ZAVALA**

**LIC. MARÍA ELENA
CORNEJO ESPARZA**